

CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas

Un año dentro y fuera de la capital. . . . 10
Un semestre id. id. . . 6
Un trimestre id. id. . . 4
Números sueltos. . . . 0'25
Se publica todos los días excepto los domingos.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la Gaceta.—(Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA
del
CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

GOBIERNO DE PROVINCIA

SUSCRIPCION NACIONAL

PARA CONTRIBUIR A REMEDIAR LAS DESGRACIAS OCASIONADAS POR LAS INUNDACIONES EN LAS PROVINCIAS DE TOLEDO, ALMERÍA Y VALENCIA.

Pesetas

Suma anterior. . . . 9.899'89

Continúa abierta la suscripción en la Secretaría de este Gobierno.

Orense 3 de Febrero de 1892.

El Gobernador,

MARCIAL CARBALLIDO BUGALLAL.

CIRCULAR

Los señores Alcaldes, fuerza de la Guardia civil, agentes de vigilancia y demás dependientes de mi autoridad, procederán a la busca y captura de los cinco reclusos evadidos de la cárcel de Hellín el día 30 del mes de Enero último, cuyos nombres y señas personales a continuación se expresan, reclamados por el Ilmo. Sr. Director general de Establecimientos penales, poniéndolos, caso de ser habidos, a disposición de este Gobierno.

Diego Sanchez Moreno (a) Tronera.

Natural de Toxarra.

Edad 42 años.

Fornido.
Moreno.
Viste: traje color plomo, sombrero idem café.
Va sin afeitar.

Emilio Serrano Castro.

Edad 22 años.
Estatura regular.
Valenciano.
Cara delgada.
Nariz afilada.
Viste: ropa de paño oscuro, gasta boina de punto color café y botas.

Francisco Perez Tiner Corona.

Edad 22 años.
Estatura regular.
Delgado.
Afeitado.
Ojos azules.
Nariz y boca regular.
Viste: pantalon de paño oscuro, gorra de piel y alpargatas.

Joaquín Hernando.

Estatura regular.
Sin barba.
Boca grande.
Labios rícos.
Cara abultada y ancha.
Viste: pantalon de lana listado, blusa tableada corta y oscura, lleva boina y alpargatas.

Joaquín Santamaria Expósito.

De Elche.
Alto.
Moreno.
Picado de viruelas.
Con un lunar de pelo en el carrillo.

Viste: traje paño negro, boina y alpargatas.

Orense 3 de Febrero de 1892.

El Gobernador,

MARCIAL CARBALLIDO BUGALLAL.

JUNTA PROVINCIAL
DE INSTRUCCION PÚBLICA DE ORENSE

Vacante la plaza de Oficial de

contabilidad de esta Corporación, dotada con el sueldo anual de mil setecientos setenta y cinco pesetas, ha de provistarse con arreglo a las prescripciones de los artículos 8 y 12 de la Real orden de 8 de Noviembre de 1882.

Los que se crean, con derecho para solicitarla, presentarán sus solicitudes documentadas en la Secretaría de esta Junta dentro del término de quince días, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín oficial.

Orense Enero 31 de 1892.—El Gobernador Presidente, Marcial Carballido Bugallal.

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

REALES DECRETOS

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador de la provincia de Málaga y el Juez de Instrucción de Estepona, de los cuales resulta:

Que D. José García Infante denunció ante el referido Juzgado el hecho de que, hallándose en una de las habitaciones de su domicilio en el pueblo de Casares, calle de la Villa, número 3, tratando con sus trabajadores de asuntos de su hacienda, empezaron a entrar varios amigos a pasar la velada y hablar de asuntos que afectaban a la Municipalidad del expresado pueblo, y que pensaban denunciar al Gobernador de la provincia por constituir irregularidades administrativas; que de una manera furtiva se introdujo en dicha habitación el Alcalde D. Cristóbal Bravo y Romo, y con maneras poco corteses empezó a insultar a los que allí estaban reunidos, diciendo que todo lo que trataban era una mentira y que saliera todo el mundo a la calle; que el denunciante le pidió la orden judicial que le había autorizado para entrar en la casa; que la única explicación que dió el Alcalde fué llamar a la Guardia civil que tenía apostada en la puerta, y obediendo sus mandatos echó violentamente a la calle a todos los que se hallaban en la casa, allanando así la morada del querellante, prevalido del carácter de Autoridad y de la fuerza pú-

blica; que la reunión de los concurrentes no tenía carácter de reunión pública, pues a ser así se hubieran llenado los requisitos legales, ni tenía por objeto atentar contra el orden de cosas establecido; que dichos hechos revisten caracteres de delito y especialmente el comprendido en el art. 215 del Código penal:

Que instruida la correspondiente causa, se practicaron varias diligencias, trayéndose a los autos una certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Casares, en la que consta que los alguaciles de dicho pueblo habían comparecido ante el Alcalde D. Cristóbal Bravo y Romo, y le manifestaron que en la casa de Don Pedro García Trujillano, calle de la Villa, núm. 3, habían visto entrar mas de 40 hombres, en su mayoría vecinos del expresado pueblo; que por no ser dependientes ni amigos de la casa, creían que iban a reunirse y a asociarse públicamente sin expresar el fin y objeto de la reunión o asociación, llamando mas la atención la acumulación de tanta gente, cuando el dueño de la casa se encontraba ausente y estaba imposibilitado materialmente para convocar tales reuniones; que no habían visto en los concurrentes actitud hostil ni manifestación alarmante; que reuniones análogas se venían celebrando hacía tiempo, aglomerándose con tal motivo en la calle gran número de personas; que la reunión tenía lugar en habitaciones distintas de aquellas en que vive la familia; que, según de público se dice, en las reuniones se hablaba contra los impuestos y Autoridades constituidas, habiendo habido algún altercado entre los concurrentes al Comité (nombre con que se designaba la reunión), y los individuos que asistían a un café, situado enfrente de la casa de que se trata, creyéndose por algunos momentos que se promovería un conflicto; y por último, que con motivo de los bailes de máscaras que iban a celebrarse la noche a que viene haciéndose referencia, se aseguraba de público que varias personas disfrazadas promoverían conflicto en el referido Comité:

Que de la certificación resulta también que el Alcalde acordó que impetrando el auxilio del Comandante del puesto de la Guardia civil se procediera a la suspensión de la reunión o asociación que estaba celebrándose públicamente en casa de D. Pedro García

Trujillano, fundándose en que por el número de personas que á ella asistían y por el local en que se celebraba, no podía ser legal, por cuanto no se había comunicado oportunamente á la Autoridad ni tampoco había podido convocarla el dueño de la casa por encontrarse enfermo y ausente; acordando el Alcalde que se requiriese, al efecto, por si se tratase de un delito, al Juez municipal para que, si se negase la entrada á la Autoridad, concediera la autorización que se le pediría, que acto seguido, el Alcalde D. Cristóbal Bravo Romo, con asistencia de los alguaciles y auxilio de la Guardia civil, se constituyó en la casa de D. Pedro García Trujillano, en cuyo acto estaba presente el Juez municipal, previo aviso, y requeridas las personas, que se encontraban en el portal de la casa para que manifestaran si estaba allí el dueño de la misma y quien convocaba la reunión, manifestaron que ignoraban quien fuese, por cuanto D. Pedro García Trujillano se encontraba en Málaga hacía próximamente dos meses; y seguidamente, el Alcalde penetró en el local contiguo al portal y preguntando quien era el que presidía la reunión y con que objeto se convocaba, y no habiendo quien contestara categóricamente, ordenó la suspensión de la reunión que estaba compuesta de 50 personas, verificándose la disolución con el mayor orden y sin protesta alguna.

Que procesado D. Cristóbal Bravo y Romo y acordada la suspensión en los cargos de Concejal y Alcalde del Ayuntamiento de Casares, el Gobernador de Málaga, á instancia del interesado, y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de inhibición al Juzgado, fundándose en que los Alcaldes son representantes del Gobierno y ejercen todas las funciones que por las leyes les están conferidas, y en tal concepto deben velar por su exacto cumplimiento, interponiendo su autoridad para garantizar los derechos de los habitantes del término municipal; en que al reunirse en casa de D. Pedro García Trujillano mas de 40 personas ajenas á la familia, sin dar previo aviso á la Autoridad local del objeto, sitio, día y hora de la reunión, cometieron una infracción manifiesta de la ley, y en tal virtud, el Alcalde obró dentro de las prescripciones legales al suspender la reunión; en que mientras el Gobernador no determine si el Alcalde de Casares obró ó no dentro del círculo de sus atribuciones, ó si, por el contrario, se excedió de las mismas, existe una cuestión previa que ha de resolverse por la Administración, sin que la jurisdicción ordinaria pueda entender del asunto hasta que dicha cuestión esté resuelta; el Gobernador citaba los artículos 199 de la ley Municipal, 1.º, 2.º y 5.º de la ley de 30 de Junio de 1880 y 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que tramitado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdicción, alegando que el hecho que se persigue en la causa, y que consiste en haber disuelto don Cristóbal Bravo y Romo la reunión compuesta de 12 personas que estaban en casa de D. José García Infante, reviste los caracteres de un delito cometido por funcionario público contra el ejercicio de los derechos individuales, cuyo conocimiento corresponde á la jurisdicción ordinaria, sin que hubiera cuestión alguna previa administrativa; el Juzgado citaba los artículos 10, 14 y 303 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 321 y 325 de la ley orgánica del Poder judicial, y 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887.

Que el Gobernador, de acuerdo con la mayoría de la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando

de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores promover contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo de los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Visto el art. 215 del Código, que determina las penas en que incurre el funcionario público que no siendo Autoridad judicial y no estando en suspensión las garantías constitucionales entrare en el domicilio de un español ó extranjero sin su consentimiento:

Visto el art. 2.º de la ley de 15 de Junio 1880, que dispone lo siguiente: «Por reunión pública para los efectos de esta ley se entiende la que haya de constar de más de 20 personas y haya de celebrarse en edificio donde no tengan su domicilio habitual los que la convoquen»:

Visto el art. 5.º de la propia ley, según el cual la Autoridad mandará suspender ó disolver en el acto: primero, toda reunión pública que se celebre fuera de las condiciones de esta ley; segundo, todas aquellas que habiéndose convocado con arreglo á ella, traten de objetos no consignados en el aviso ó se verifiquen en sitio diverso del designado; tercero, las que en cualquier forma embaracen el tránsito público; cuarto, las definidas y enumeradas en el art. 189 del Código penal, y quinto, aquellas en que se cometa ó trate de cometer cualquiera de los delitos especificados en el título 3.º, libro 2.º del mismo Código. En todos estos casos la Autoridad dará inmediatamente cuenta al Gobierno, y en los dos últimos pasará, además, al Tribunal competente el oportuno tanto de culpa:

Considerando:

1.º Que la querella presentada por D. José García Infante versa sobre el hecho de haber entrado el Alcalde de Casares en el domicilio del denunciante y haber obligado á las personas que allí había á salir á la calle y abandonar la casa en que se encontraban:

2.º Que según resulta de los autos y declaraciones del mismo D. Cristóbal Bravo Romo, éste penetró en la casa del denunciante sin auto judicial é hizo salir á las personas que se encontraban en una habitación del expresado domicilio:

3.º Que el hecho denunciado puede constituir un delito definido en el Código penal, y cuya averiguación y castigo en su caso corresponde á los Tribunales de justicia:

4.º Que la única cuestión previa que podría invocarse consistiría en determinar si el Alcalde de Casares había hecho ó no uso debido de las atribuciones que le confiere la ley de 15 de Junio de 1880:

5.º Que en el presente caso no hay que resolver esa cuestión previa, toda vez que la reunión se verificaba en el domicilio del denunciante, y por tanto no era pública para los efectos de la citada ley:

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno:

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en Palacio á diecisiete de Enero de mil ochocientos noventa y dos.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

(G. núm. 24.)

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de Santander y el Juez de primera instancia de Laredo, de los cuales resulta:

Que en sesión celebrada por el Ayuntamiento de Ampuero en 9 de Marzo último, y en virtud de una queja producida contra el vecino del mismo pueblo D. Emilio Talledo por estar ejecutando obras en la vía pública y sitio denominado El Río, frente á la rampa de la iglesia de aquella villa, acordó que por la Alcaldía se ordenase la suspensión de dicha obra por no haberse solicitado el permiso necesario para llevarla á cabo, y que se notificase este acuerdo al interesado:

Que en otra sesión celebrada por la misma Corporación municipal en 20 de Abril del mismo año, el Alcalde hizo presente que, en vista del acuerdo anterior, se había requerido al D. Emilio Talledo para que suspendiera el levantamiento de la pared que estaba construyendo en la margen izquierda del río de aquella villa; que así lo había hecho Talledo, pero que la pared construida privaba ya entonces el aprovechamiento de las aguas del río en la forma que los vecinos venían haciéndolo; que, en su vista, el Ayuntamiento acordó que se requiriera al referido D. Emilio Talledo para que en el término de ocho días destruyera la referida pared que había edificado en la margen izquierda del río que lleva el nombre de aquella villa por hallarse dicha pared en terreno público é impedirse con ella el aprovechamiento de las aguas en la forma en que lo había venido haciendo el vecindario; que al propio tiempo se advirtiera al mismo Talledo que de no verificarlo se efectuaría de oficio á su costa, para lo cual se daba desde luego comisión al Alcalde; y por último, que se previniese al mismo Talledo que de no estar conforme con el acuerdo, podía utilizar el recurso que señala el art. 172 de la ley Municipal vigente:

Que en instancia de 9 de Mayo próximo pasado, el referido D. Emilio Talledo dedujo recurso de alzada ante el Gobernador civil de la provincia contra el acuerdo antes mencionado de 20 de Abril, y tramitándose este recurso, acudió el mismo interesado ante el Juez de primera instancia, con escrito fecha 16 de Mayo último, incoando una demanda en juicio civil ordinario contra el Ayuntamiento de Ampuero, con la pretensión de que en definitiva se declarase nulo el acuerdo de la Corporación municipal demandada de 20 de Abril, y que al demandante correspondía en plena propiedad y dominio la finca en la que se ejecutaba la obra cuya destrucción había ordenado la Corporación municipal:

Que por medio de otrosí, en dicho escrito de demanda, la parte actora solicitó del Juzgado la suspensión del acuerdo reclamado; y el Juez, por providencia de 19 de Mayo del mismo año, resolvió de conformidad con la pretensión deducida por el demandante:

Que emplazado en forma el Ayuntamiento, y personado en autos el Alcalde de Ampuero, acudió al Gobernador civil de la provincia para que esta Autoridad requiriera de inhibición á la judicial, como así lo hizo, de acuerdo con la Corporación provincial, fundándose en que bajo cualquiera de los dos aspectos que podía examinarse este asunto, correspondía el mismo á la exclusiva competencia de la Administración; en que si se le consideraba comprendido en las facultades generales que la ley Municipal concede á los Ayuntamientos para conservar los bienes y derechos de sus administrados, rechazando las invasiones ó usurpaciones que en ellos se cometieren, el artículo 72 de aquella ley autorizaba al

de Ampuero para adoptar el acuerdo recurrido, y por lo tanto, contra él no procedía otro recurso que el que establece el artículo 171 de dicha ley, sin que baste alegar que el terreno en que se verificó el cerramiento fuera de la propiedad de Talledo, porque esto no le eximia de prestar las servidumbres que debiera al vecindario; en que si se tenía en cuenta que el expresado cerramiento afectaba al río, era aun mas terminante la competencia de la Administración, porque, según el artículo 36 de la ley de aguas de 13 de Junio de 1879, las riberas de los ríos, aun cuando sean de dominio privado, están sujetas á las servidumbres de uso público, y las obras que en ellos se intenten por los dueños están sujetas á la autorización de la Administración, con arreglo á los artículos 82, 83 y 84; en que con arreglo tambien al art. 126 de la citada ley, todos tienen derecho á hacer uso de las aguas que corren por sus cauces naturales y públicos, para los fines que el mismo determina, con sujeción á los reglamentos y bandos de policía municipal; y en cuanto las providencias que en estas materias se dictan, el art. 281 las atribuye á la Administración en todas sus instancias:

Que sustanciado el conflicto, el Juez dictó auto declarándose competente, alegando que el propietario de un terreno podía hacer en él las obras que le conviniesen, quedando á salvo las servidumbres y sujetándose á lo dispuesto en las leyes de Aguas, minas y reglamentos de policía, que la obra que se decía en la demanda que se estaba ejercitando en terreno de propiedad privada consistía en la reconstrucción de un pequeño muro, existente con anterioridad y á fin de nivelar el camino, por cuya circunstancia, y aun cuando estuviera lindante con el río, no debía reputarse como obra de defensa contra las aguas, lo cual, por otra parte, no impedía el uso de las mismas ni el ejercicio de las servidumbres que sobre las riberas y márgenes establecía el art. 36, en el caso de que existieran términos hábiles para ello, además de que en el supuesto de que fueran obras de defensa, no podían suspenderse ni ordenarse su destrucción sino en virtud de expediente y cuando amenazaren causar perjuicios á la navegación ó flotación, desviar la corriente ó producir las inundaciones; que la providencia dictada por la Administración municipal, origen del litigio, no recayó sobre materia de aguas sino que, conforme en ella se expresaba, tuvo lugar á consecuencia de estar se ejecutando una obra en la vía pública y margen izquierda del río, por la que se impedía el aprovechamiento de las aguas, y, por consiguiente, eran inaplicables las disposiciones de los artículos 251 y 253 de la vigente ley sobre esta materia, toda vez que tampoco se trataba de conservar una servidumbre legal ó forzosa impuesta por la ley de Aguas, sobre propiedad privada, sino antes bien, de crear ó permanecer en el derecho de pasar por esta para el aprovechamiento de las aguas, según la costumbre ó repetición de actos de esta índole en determinado tiempo, cuyo conocimiento, como cuestión relativa á servidumbre de aguas y de paso por las márgenes de un río fundada en un título de derecho civil, correspondía á la competencia de los Tribunales ordinarios, según el art. 254 de dicha ley, que si bien era de la competencia de los Ayuntamientos el cuidado, aprovechamiento y conservación de los bienes y derechos pertenecientes al Municipio, pudiendo, en su consecuencia, tomar los acuerdos que procedieran, cabe siempre contra ellos recurso algunas veces en la vía gubernativa, y apurada ésta en la contenciosa, ya ante la Administración ó ya ante los Tribunales

dinarios, según la naturaleza del acuerdo y el carácter del derecho que se creyera lesionado, y siendo este de índole civil, como en el caso de que se trataba sucedía, el conocimiento correspondía a la jurisdicción ordinaria:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 172 de la ley Municipal vigente, según el cual, los que se crean perjudicados en sus derechos civiles por los acuerdos de los Ayuntamientos, haya sido o no suspendida su ejecución en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores, pueden reclamar contra ellos mediante demanda ante el Juez ó Tribunal competente, según lo que, atendida la naturaleza del asunto, dispongan las leyes.

Considerando:

1.º Que si bien los acuerdos tomados por el Ayuntamiento de Ampuero pudieran estar dentro del círculo de las atribuciones que las leyes le confieren, cuando con ellos se lesionara un derecho civil, puede el que se crea perjudicado deducir su acción ó su demanda ante el Juez ó Tribunal competente, según lo que, atendida la naturaleza del asunto, dispongan las leyes.

2.º Que los derechos que el demandante invoca para entablar su acción ante los Tribunales del fuero común son derechos de propiedad y dominio, y versando sobre este particular el pleito que se sigue ante la jurisdicción ordinaria, á la misma corresponde conocer de ella con arreglo á las leyes.

3.º Que si tal propiedad y dominio de la finca en donde el muro se construye estuviera limitado por servidumbres constituidas á favor del común de vecinos, la Corporación municipal puede reclamar y hacer efectivos tales derechos en el referido pleito:

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial

Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil ochocientos noventa y dos.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

(G. núm. 27)

MINISTERIO DE ULTRAMAR

EXPOSICION

Señora: La nueva organización de los servicios administrativos en la isla de Cuba decretada por V. M. en 31 del pasado Diciembre exige ser rodeada desde su planteamiento de las mayores garantías posibles de imparcialidad y de acierto.

En aquellas provincias, por lo lejanas del centro donde reside el Gobierno, por la novedad de las instituciones populares que se establecieron al dotarlas para su régimen económico y político de una constitución similar á la de las demás provincias del Reino y por las condiciones especiales en que viven y trabajan por su progreso, se hace preciso poner el Consejo precediendo y acompañando á la acción gubernamental, y fundar con esmero los organismos necesarios de la Administración consultiva.

Ella es compatible con la integridad de las facultades de que debe estar investida la Autoridad, y su auxilio es para ésta por extremo conveniente si las instituciones creadas

para la consulta encierran en su seno elementos del país, concedores de sus necesidades y aleccionados por la experiencia propia de las faltas ó deficiencias de los servicios, del acierto, del error y aun de la moralidad de los funcionarios públicos.

En todo tiempo y aun antes del régimen que hoy encauza la nueva vida de aquellas provincias, la legislación estableció el Consejo al lado del representante del Gobierno superior para los casos graves y para todas las cuestiones de interés general en aquellas regiones, con la Junta de Autoridades, cuyo acuerdo era necesario en asuntos importantes, y con el Consejo de Administración en que á las Autoridades se unían cierto número de Consejeros, hijos del país, que vienen sirviendo sus cargos gratuita y honoríficamente.

Esta institución, en todo tiempo respetada, arraigada en la tradición, que ha dado en la práctica del gobierno indudables y beneficiosos resultados, ofrece el modelo que debe tenerse en cuenta al intentar crear la Administración consultiva, como precioso auxiliar y compañera inseparable de la Administración activa.

Dejando para que Reales órdenes sucesivas reglamenten los casos en que deben ser oídos los Consejos ó Juntas que por este decreto se establecen: siendo potestativo siempre en la Autoridad solicitar su consejo en lo político, en lo económico y en lo administrativo, y aun dotándoles de facultades propias de mera inspección y del deber de informar al Poder Supremo sobre la probidad de la Administración y la manera con que ésta cumple ó falta á sus fines, su buena organización será garantía de obtener ventajas que todos desean para el buen nombre de la Patria y el amparo de nuestros sagrados intereses en aquellas apartadas provincias.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de proponer á V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 29 de Enero de 1892.—Señora: A. L. R. P. de V. M., Francisco Romero y Robledo.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Ultramar; de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Al lado de cada Autoridad gubernativa de la isla de Cuba, desde el Gobernador general hasta el Gobernador de provincia, se creará una Junta ó Consejo compuesto de las primeras Autoridades que existan en la respectiva capital y del número de individuos domiciliados y arraigados en el país que determina este decreto.

Art. 2.º El Consejo general de Administración, con residencia en la Habana, le compondrán el Presidente de la Audiencia, el Reverendo Obispo de la diócesis, el Comandante general del apostadero, el Interventor general del Estado y diez Consejeros nombrados por la Corona; dos de ellos propietarios, dos hacendados productores de azúcar, dos hacendados productores de tabaco, dos industriales y dos comerciantes.

Art. 3.º Una vez nombrados los Consejeros y aceptados por ellos el cargo, no podrán ser destituidos sin justa causa ni admitidas sus dimisiones sino por motivos que se estimen racionales y fundados.

Art. 4.º En las regiones y provincias formarán el Consejo el Goberna-

dor de las mismas, el Comandante general, la Autoridad eclesiástica de más elevada jerarquía, el Presidente de la Audiencia; si lo hubiere, el Presidente de la Diputación provincial, ocho Consejeros de Real nombramiento en las regiones y cuatro en las provincias, que deberán ser también arraigados y domiciliados en la región ó provincia respectiva y recaer los nombramientos en personas pertenecientes á las distintas clases de las que contribuyen á sostener las cargas públicas.

Art. 5.º De lo preceptuado en el artículo anterior se exceptúa el Consejo regional administrativo de la Habana, que se compondrá del Gobernador, del Comandante general segundo Cabo, del Presidente de la Diputación, del Rector de la Universidad y de ocho Consejeros nombrados en la forma que previene el artículo precedente.

Art. 6.º El Cargo de Consejero es gratuito y honorífico, con las obligaciones y el disfrute de las prerrogativas que se determinarán para el cumplimiento de este decreto. Los nombramientos de los individuos del Consejo general de Administración se harán por Real decreto, y los de los demás por Real orden.

Art. 7.º Será Presidente del Consejo general de Administración el Presidente de la Audiencia de la Habana, y de los Consejos regionales y provinciales el Gobernador de la región ó provincia respectiva. El Presidente podrá delegar sus funciones en cualquiera de los Consejeros cuando no pueda asistir á las sesiones.

Art. 8.º El Gobernador general de la isla de Cuba podrá concurrir á las sesiones ó convocar á cualquiera de los Consejos que se establecen. Siempre que por una ú otra causa asista el Gobernador general á las sesiones de cualquier Consejo, tendrá la Presidencia con voz y voto decisivo en caso de empate en las deliberaciones.

Art. 9.º El Consejo general tendrá un secretario, Jefe de Administración de primera clase.

Las funciones de Secretario serán desempeñadas en los demás por el que lo sea de la región ó provincia.

Para atender al sueldo de aquel y á los gastos necesarios de cada Consejo, el Ministro de Ultramar hará la distribución del crédito subsistente en los capítulos 10 y 11, artículos únicos de la sección 6.ª de la ley de Presupuestos, según lo dispuesto en el art. 5.º de Mi decreto de 8 del corriente.

Art. 10. El Consejo general de Administración continuará compuesto por los mismos individuos que hoy le forman.

Solo cuando de ellos faltaren hasta no completar el número de Consejeros que deben componerle, según el artículo 2.º de este decreto, se procederá á hacer nuevos nombramientos.

Art. 11. El plazo concedido en Mi decreto de 31 de Diciembre último, en su art. 14, para el planteamiento de los servicios reorganizados, será prorrogado por un mes, ó sea hasta 1.º de Marzo.

Art. 12. El Ministro de Ultramar dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo preceptuado en este decreto.

Dado en Palacio á treinta de Enero de mil ochocientos noventa y dos.—María Cristina.—El Ministro de Ultramar, Francisco Romero y Robledo.

ANUNCIOS OFICIALES

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES

En la *Gaceta* del día 29 de Enero corriente se inserta la Real orden y pliego de condiciones económicas para la subasta de las obras que han de hacerse en Madrid en el local que

ocupa la Dirección general de Correos y Telégrafos, por la suma presupuestada de 27.367'92 pesetas.

Lo que se anuncia al público, para que los que lo deseen, tomen parte en dicha subasta.

Madrid 30 de Enero de 1892.—El Director general, El Marqués de Mocholes.

INSPECCION DE LA CAJA GENERAL DE ULTRAMAR

En cumplimiento de cuanto disponen las Reales órdenes de 6 de Abril y 21 de Julio últimos, la Caja general de Ultramar abre el pago de los alcances que resultaron en sus ajustes finales á los individuos que habiendo fallecido perteneciendo á los cuerpos de Infantería y Caballería del Ejército de la isla de Cuba causaron baja por aquel concepto en los años económicos de 1882 al de 1885.

Los interesados en los alcances, á quienes se avisa directamente por conducto de los Alcaldes de los pueblos de la naturaleza de los fallecidos, podrán presentarse por sí ó por medio de persona legalmente autorizada en esta Caja general de Ultramar, en los días y horas señaladas para pagos, á percibir el importe de aquellos alcances, debiendo justificar previamente su derecho con los documentos correspondientes, según el grado de parentesco que tenían con los causantes.

Madrid 8 de Enero de 1892.—El General Inspector, S. Valdés.

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Anuncio

El Recaudador de Contribuciones de la única zona del partido de Verín, D. Ignacio Contreras, me comunica con esta fecha el nombramiento de Recaudadores auxiliares para la cobranza de las mismas en la indicada zona, á favor de D. José Rivas Lois y D. Francisco Contreras.

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción vigente de 12 de Mayo de 1888, hago público para el debido conocimiento de las autoridades llamadas á intervenir en los actos de dichos funcionarios, encareciéndoles les presten cuantos auxilios pudieran necesitar en el ejercicio de sus cargos y siempre bajo la responsabilidad del Recaudador propietario D. Ignacio Contreras.

Orense 1.º Febrero de 1892.—El Administrador, Urbano Gonzalez Rivera.

Recaudacion de Beariz é Irijo

La cobranza de las de territorial é industrial correspondiente al tercer trimestre de este ejercicio, tendrá lugar en los días que se designan del corriente mes.

Beariz el 3, 4 y 5 del mes actual.

Irijo el 7, 8, 9 y 10 del mismo mes.

Lo que en cumplimiento de la instrucción vigente de Recaudadores se hace público para conocimiento de los contribuyentes domiciliados en los mismos.

Beariz 1.º Febrero de 1892.—El Recaudador, Ignacio Contreras.

Recaudacion de Canedo

La cobranza de las contribuciones de territorial y subsidio correspondientes al tercer trimestre de este año tendrá lugar la del mismo desde el día 4 al 9, ambos inclusivos, del mes de la fecha y en el local y horas de costumbre.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la instrucción vigente de Recaudacion se hace público para que

llegue á conocimiento de los contribuyentes domiciliados en dicho distrito.

Canedo 1.º de Febrero de 1892.—El Recaudador, José Lopez.

Barbadanes

La cobranza de las contribuciones de territorial y subsidio del tercer trimestre del actual ejercicio, estará abierta en el local de costumbre desde el día 5 al 7 inclusive del próximo mes de Febrero.

Lo que se hace público para conocimiento de vecinos y forasteros.

Barbadanes 30 de Enero de 1892.—El Recaudador, Gumersindo Noguerol.

Ayuntamientos de Baltar, Blancos y Porquera del partido de Ginzo

La cobranza de las contribuciones por territorial y subsidio correspondientes al tercer trimestre del actual ejercicio de 1891-92 tendrá lugar la de los mismos en los días que se expresan á continuación.

Baltar los días 15, 16 y 17 del mes de Febrero.

Blancos los días 18, 19 y 20 del idem idem.

Porquera los días 21, 22 y 23 del idem idem.

Lo que en cumplimiento de la instrucción vigente de Recaudadores se hace público para conocimiento de los contribuyentes domiciliados en los mismos, debiendo exigir del Recaudador el talon-recibo firmado por el mismo, único documento que justifica el pago.

Blancos 1.º de Febrero de 1892.—El Recaudador, Francisco Plaza.

AYUNTAMIENTOS

PUENTEDEVA

La cuenta documentada de ingresos y gastos de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio económico de 1890 á 1891, estará de manifiesto al público en la Secretaría municipal los quince días siguientes al de la inserción de este anuncio en el *Boletín oficial* de la provincia á los efectos de la ley Municipal.

Por igual término y en la misma Secretaría del Ayuntamiento se hallarán expuestos al público los presupuestos adicionales y el refundido para el corriente ejercicio de 1891 á 1892, así como el ordinario para 1892 á 1893, á los efectos de la referida ley.

Puentedeña Enero 30 de 1892.—El Alcalde, Fernando Lorenzo.

MERCA

Los domingos, 7 y 14 de Febrero próximo, á las once de la mañana, tendrá lugar en esta consistorial, la subasta del arriendo de los derechos establecidos por los puestos públicos de la plaza y feria mensual de la Merca, así como de las casas, matadero y taberna, por el año económico próximo de 1892 á 1893, todo con arreglo á la tarifa y pliego de condiciones que se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Lo que se anuncia para conocimiento de todos aquellos á quienes pueda interesar.

Merca Enero 31 de 1892.—El Alcalde, Bautista Outumuro.

LOBERA

Los presupuestos municipales de ingresos y gastos adicional y refundido para el corriente ejercicio, se hallan al público en esta Secretaría por término de quince días para que puedan ser examinados por los contribuyentes, quienes presentarán las reclamaciones que crean convenientes.

Por igual tiempo y á los efectos

expresados, se hallarán también al público en el mismo local las cuentas municipales definitivas y documentadas, correspondientes á los periodos ordinario y de ampliación del año económico último de 1890-91.

Lobera, Enero 27 de 1892.—El Alcalde Presidente, José González.

RUA

Don Gervasio Mondelo Sotelo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Rua.

Hago saber: que habiéndose formado el repartimiento del impuesto de la sal de este término municipal correspondiente al año económico de 1891 á 1892, la Junta repartidora que tengo la honra de presidir ha acordado se exponga al público en la Secretaría de la Corporación por el término de ocho días, á contar desde esta fecha, con objeto de que los contribuyentes puedan examinarle y hacer las reclamaciones que consideren justas, para cuya resolución se reunirá la Junta el día 12 á las diez de la mañana en el local de sesiones de la casa consistorial.

Lo que se anuncia por el presente edicto para conocimiento de los interesados, á fin de que puedan hacer uso de sus derechos, sin que después aleguen ignorancia.

Rua 1.º de Febrero de 1892.—El Alcalde, Gervasio Mondelo.

PARADA DEL SIL

Los contribuyentes de este distrito que hubiesen sufrido alteración en su riqueza, presentarán en todo el mes de Febrero próximo las relaciones de altas y bajas en papel de la clase 12.ª con la oportuna documentación que acredite el pago de derechos á la Hacienda, á fin de proceder á confeccionar el apéndice al amillaramiento según está prevenido, pasado dicho término no habrá lugar y se fijará á cada uno la riqueza con que viene figurando para el repartimiento del año próximo.

Parada del Sil 27 de Enero de 1892.—El primer Teniente Alcalde, Juan Bertolez.

MONTEDERRAMO

La lista electoral de compromisarios para la elección de Senadores se hallará de manifiesto en la Secretaría de este municipio por término de veinte días contados desde la inserción de este anuncio en el *Boletín oficial* de la provincia, á fin de que los interesados puedan hacer las reclamaciones que estimen procedentes, pasado cuyo plazo no se admitirá ninguna.

Montederramo, Enero 31 de 1892.—El Alcalde, Manuel Estévez.

SAN JUAN DE RIO

La cobranza de las contribuciones territorial é industrial de este Ayuntamiento, correspondiente al tercer trimestre del corriente año económico se verificará por el recaudador D. Manuel García Luna en los días 10, 11 y 12 del próximo Febrero, y sitio ó local de costumbre á donde concurrirán los contribuyentes á satisfacer sus cuotas, desde las ocho de la mañana á las tres de la tarde; advirtiéndoles que los morosos sufren los recargos de instrucción tan luego se termine el periodo de cobranza voluntaria que dura hasta el día 10 del siguiente mes con la recaudación abierta.

Rio, Enero 29 de 1892.—El Alcalde, Manuel Sabin.

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

El Licenciado D. Eladio Rodríguez, Valeiras, Juez de primera instancia de Ribadavia.

Hago público: que en este Juzgado y Escribanía del que autoriza se propuso por el Procurador Guntín á nombre de doña Angela Salgado Lopez, de Lugo, como madre de sus hijos menores de edad D. Ramon y doña Purificación, demanda en juicio declarativo de menor cuantía contra Manuel Estevez Casares de esta Villa, y D. Pedro Rolan, como marido de doña Felicitá Vazquez. Mandado emplazar á éstas por providencia de once de Diciembre último para que dentro de nueve días compareciesen en los autos contestando dicha demanda, como el citado Procurador manifestase que el D. Pedro se hallaba en ignorado paradero se dictó á su instancia en siete del actual la providencia que comprende lo siguiente:

«Toda vez el demandado D. Pedro Rolan se halla en ignorado paradero, emplácese por edictos que se fijen en esta villa y en la Quintá de Roucos, de donde se dice fué vecino, é inserten en el *Boletín oficial* de esta provincia, para que dentro de nueve días siguientes á dicha inserción comparezca en este juicio.»

Y á los efectos de la parte de providencia inserta, se forma el presente apercibiendo al aludido demandado ausente que de no comparecer en el término concedido, le parará el perjuicio que haya lugar en derecho.

Ribadavia Enero diez y nueve de mil ochocientos noventa y dos.—Eladio R. Valeiras.—Modesto Martínez.

El Sr. D. Antonio Maria Casdolo, Juez de instrucción de este partido, ha dispuesto por providencia de este día, dictada en cumplimiento de carta orden procedente de la Audiencia de lo Criminal de Orense, sean citados con las prevenciones que la ley determina, los testigos Manuel Vidueira García, Primitivo Asenjo Dominguez, Ramon Martinez Andrés, y Manuel Barja, vecinos del Pereño, en este partido, que se hallan ausentes y en punto desconocido; á medio de la *Gaceta de Madrid* y *Boletín oficial* de esta provincia, para que el día 20 del próximo mes de Febrero y hora de diez de su mañana, comparezcan ante dicho tribunal, para declarar en las sesiones del juicio oral de causa contra José Maria Barja Vega por lesiones.

Y á fin de que las mencionadas citaciones se hagan en la forma y con las prevenciones acordadas, expido y firmo la presente, en Viana del Bollo á 29 de Enero de 1892.—El Secretario, Antonio Conde.

MUNICIPALES

VILLAMARTIN DE VALDEORRAS

Rectificadas debidamente las listas de cabezas de familia y capacidades por la Junta encargada al efecto con arreglo á lo dispuesto en el art. 16 de la Ley estableciendo el juicio por Jurados, estarán de manifiesto al público en la Secretaría de este Juzgado durante la primera quincena del próximo mes de Febrero según lo previsto en el artículo 18 de la citada ley. Lo que se hace público por medio del presente á fin de que los vecinos de este municipio puedan hacer las reclamaciones de inclusión y exclusión que crean convenientes.

Villamartin de Valdeorras, Enero 29 de 1892.—El Juez municipal, Gustavo Prada Meruendano.—De su orden, Adel Yebra, Secretario.

PUENTEDEVA

Las listas para Jurados de este término municipal, rectificadas por la Junta, con arreglo á lo dispuesto en el art. 16 de la ley del Juicio por Jurados, estará expuesta al público en

la parte exterior de la puerta de este Juzgado, sita en la Aldea, casa número 70, durante la primera quincena del mes de Febrero próximo, á los efectos del art. 18 de la misma ley.

Puentedeña Enero 28 de 1892.—El Juez municipal, Marcial Lorenzo.

ANUNCIOS

GRANDES REBAJAS DE PRECIOS

CARRETES DE HILO SINGER calidad superior, de 500 yardas con carrete, todos los números y colores á pesetas 0,35 ¡siete perras chicas!

CARRETES SEDA SINGER calidad superior, de media onza cada carrete, todos los números y colores á pesetas 0,75 ¡tres realitos!

De venta en todas las sucursales de LA COMPANIA FABRIL SINGER

EN ORENSE, PROGRESO, 36 Por demás esta decir que, en el mismo establecimiento se hallan de venta las célebres máquinas para coser de LA COMPANIA FABRIL SINGER

DE NUEVA-YORK

entre las que llaman la atención del público por sus seguridades á la par que sencillez y buenisimos resultados las llamadas *Lanzadera oscilante* y *Lanzadera vibrante*.

Pídase el nuevo catálogo que acaba de publicarse, que se dá gratis. 36, PROGRESO, 36

TALLER DE MÁRMOL DE FRANCISCO PIÑEIRO ORENSE

En este establecimiento se ha recibido un variado surtido de mármoles de todas las procedencias para panteones y toda clase de muebles, hay estatuas religiosas para monumentos esculpidas en los talleres de D. Carlino Vicelli, en Génova (Italia).

Además se hallan en construcción una porción de panteones y pedestales, cruces con alegorías muy adecuadas, igualmente lápidas de mármol, estuario y negro Bélgica con preciosos relieves y bajos relieves en escultura y adorno; todos estos trabajos se podrán vender á precios sumamente baratos, así desde hoy pueden acudir á este establecimiento seguros de encontrar la economía unida al buen gusto y á lo esquisito de sus mármoles.

Se hacen panteones y sepulturas de cantería.—31

NUEVA FERIA

El Ayuntamiento de Ribadavia acordó que además de la feria mensual del día 10, se celebre otra en dicha villa el 25 de cada mes, comenzando en el actual, exenta esta última del pago de toda clase de derechos é impuestos.

La correspondiente al mes de Abril de todos los años, tendrá lugar el día 28, víspera de la festividad de San Pedro mártir en vez del 25 señalado para los demás meses.—15

MINA DE ESTAÑO

se vende

CALLE DE SAN FERNANDO, 21, ORENSE
darán razon

Imprenta LA POPULAR